



En contestación a la información solicitada al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno por [REDACTED] en el expediente [REDACTED] sobre:

La normativa penitenciaria en aras de conseguir el ambiente regimental necesario para lograr un clima tratamental que verdaderamente posibilite la reeducación y la reinserción de los internos prohíbe la introducción y posesión de diferentes objetos; por ello SOLICITO:

1) Número de móviles encontrados por centros penitenciarios

2) Cantidad y sustancias estupefacientes decomisadas por centro penitenciario.

3) Número de armas de origen casero coloquialmente llamados "pinchos carcelarios" por centros penitenciarios.

Todo ello en el periodo transcurrido en 2022.

A continuación, se refleja el número de teléfonos móviles incautados en los centros penitenciarios y de inserción social dependientes de la Secretaría General de IIPP en el período 1 de enero a 31 de diciembre de 2022, desglosado por centros, registrados en el SIP a día de 1 de febrero de 2023. Los datos aportados son susceptibles de ser modificados conforme a la documentación que se pueda recibir sobre los mismos con posterioridad a la fecha indicada.

centros	Nº Móviles
3603-A Lama (Pontevedra)	6
0201-Albacete	4
1802-Albolote	157
1303-Alcazar S. Juan	1
1103-Algeciras	138
0301-Alicante Cumpliment	46
0303-Alicante II -Villena	116
0401-Almería	106
3502-Arrecife	39
3311-Asturias	48
0501-Ávila	3
0601-Badajoz	22
0901-Burgos	35
1003-Cáceres	33
1201-Castellón I	52
1202-Castellón II	30
5101-Ceuta	79



2831-CIS A. Henares	10
2102-CIS Huelva	1
2832-CIS Navalcarnero	1
4104-CIS Sevilla	1
3803-CIS Tenerife	2
4608-CIS Valencia	1
1401-Córdoba	41
1601-Cuenca	5
5006-Daroca (Zaragoza)	8
3402-Dueñas - Moraleja	88
3901-El Dueso	76
1305-Herrera Mancha	3
2101-Huelva	13
2301-Jaén	10
3501-Las Palmas	24
3503-Las Palmas II	39
2401-León	21
2601-Logroño	14
2701-Lugo -Bonxe-	29
2702-Lugo -Monterroso-	12
2828-Madrid I - A.Henares	48
2801-Madrid II -A.Henares	32
2823-Madrid III-Valdemoro	167
2824-Madrid IV-Navalcarn.	44
2826-Madrid V Soto d Real	62
2827-Madrid VI -Aranjuez	25
2830-Madrid VII-Estremera	102
2902-Málaga	195
2904-Málaga II	17
0701-Mallorca	25
5201-Melilla	74
3001-Murcia	9
3004-Murcia II	42
4501-Ocaña I	32
4504-Ocaña II	13
3201-Orense	6
3102-Pamplona I	9
4106-Psiq.Penit. Sevilla	1
1101-Puerto I - Cádiz	1
1104-Puerto II - Cádiz	15
1106-Puerto III - Cádiz	44
3802-Santa Cruz D L Palma	4
4002-Segovia	10
4102-Sevilla	34
4103-Sevilla II - Morón	34
4201-Soria	5
1502-Teixeiro (A Coruña)	12
3801-Tenerife	39
4401-Teruel	4
3702-Topas (Salamanca)	101
4600-Valencia	95
4701-Valladolid	38
5001-Zaragoza - Zuera	80
total	2.733

En cuanto a las peticiones formuladas en sus preguntas 2 y 3

Una vez analizada la información requerida, esta Secretaría General considera que habida cuenta de su estricto contenido y características, su divulgación afectaría seriamente la seguridad de los establecimientos penitenciarios, de sus trabajadores e, indirectamente, a la propia salud de la población reclusa.

Dar carácter público a estos datos a nivel general, supondría el riesgo de colocar a las instituciones penitenciarias en una situación de vulnerabilidad que comprometería seriamente la función pública que desempeña.

De las incautaciones que se realizan una parte muy considerable son sustancias cuya presencia en el interior de los centros penitenciarios significa la necesaria introducción ilegal desde el exterior mediante el uso de mecanismos o procedimientos que burlan los controles de seguridad existentes.

Del mismo modo cabe responder en cuanto a la inconcreta referencia a las armas.

Facilitar esta información de forma desagregada pone en riesgo las estrategias de seguridad que se implementan en la evitación de introducción de objetos y sustancias prohibidas, la investigación de actuaciones que pudieran conllevar la comisión de supuestos ilícitos penales, poner blanco sobre negro las debilidades y fortalezas penitenciarias en esta materia.

Se entiende por esta Secretaría General que la divulgación de la información solicitada podría poner en compromiso los planes y estrategias de seguridad de una institución pública, como la penitenciaria y, en este sentido, conculcar la clasificación de este tipo de materias como reservadas según el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley 9/1968, sobre secretos oficiales, ampliado por Acuerdos del Consejo de Ministros de 17 de marzo y 29 de julio de 1994.

Siendo así que, el derecho de acceso a tal nivel de concreción entraría en colisión con lo establecido por el artículo 14.1.d) de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por cuanto la misma implicaría un perjuicio para la seguridad pública.

Divulgar públicamente estas informaciones, en la referida serie temporal, significaría un absoluto y grave menoscabo de la seguridad penitenciaria puesto que podría posibilitar un diagnóstico de la seguridad de las instalaciones ofreciendo una innecesaria información que



colisionaría con los propios fines de esta Institución.

En definitiva, la responsabilidad institucional en materia de seguridad tanto del personal penitenciario como de la población reclusa, así como de sus instalaciones, hacen claramente inconveniente acceder a facilitar toda la información solicitada ante el riesgo evidente que este acceso podría suponer.

Dicho lo anterior, y en el ánimo de que no pueda darse la interpretación del peticionario de que esta Secretaría General busca un encaje en el límite 14.1.d para no ofrecer la información, se adjunta el total de incautaciones del año solicitado en un archivo de EXCEL.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

EL SECRETARIO GENERAL DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
Ángel Luis Ortiz González